

Santiago, catorce de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, ante esta Sala del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, se llevó a efecto audiencia del juicio oral de la causa **RIT 107-2023**, seguida por el delito de tráfico ilícito de drogas en contra de la acusada **KARINNA ALEJANDRA CASTRO GUTIÉRREZ**, chilena, nacida el 10 de enero de 1987, 37 años, cedula de identidad N° 16.561.348-1, dueña de casa, domiciliada en Avenida Américo Vespucio N° 2395, depto. 21, comuna de Macul.

El Ministerio Público actuó representado por el fiscal Jorge Martínez Rodríguez, en tanto que la defensa de la acusada estuvo a cargo de la defensora penal pública Javiera Ansieta Gutiérrez, ambos con domicilio y forma de notificación ya registrados en el tribunal.

SEGUNDO: Que los presupuestos fácticos y circunstancias materia de la acusación se fundan, según se lee en el auto de apertura, en el siguiente hecho: “El día 07 de marzo del 2022, siendo aproximadamente las 13:30 horas, en el sector correspondiente a calle Mayor Abe intersección pasaje Visviri, Población Santa Julia, comuna de Macul, la acusada **KARINNA ALEJANDRA CASTRO GUTIÉRREZ**, fue sorprendida portando y trasladando al interior de un bolso color negro, diversos contenedores de pasta base de cocaína de acuerdo al siguiente detalle:

01 Calcetín blanco con 120 envoltorios de papel blanco cuadriculado contenedores de pasta base de cocaína, con un peso bruto de 32,62 gramos;

01 Calcetín blanco, en cuyo interior había 58 envoltorios de papel blanco cuadriculado contenedores de pasta base de cocaína, con un peso bruto de 16.81 gramos.

01 Bolsa verde con pasta base de cocaína a granel con un peso bruto de 129,64 gramos.

01 Monedero color negro en cuyo interior portaba 89 envoltorios de papel banco cuadriculado contenedores de pasta base de cocaína con un peso bruto de 23,76 gramos.

03 envoltorios de papel blanco, contenedores de pasta base de cocaína, con un peso bruto de 31,40 gramos

El total de la cocaína base que la acusada CASTRO GUTIERREZ transportaba y mantenía en su poder corresponde a 234,23 gramos brutos, además de la suma de \$ 86.620”.

A juicio del Ministerio Público los hechos anteriormente descritos son constitutivos de delito de **tráfico de drogas**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la Ley N° 20.000, en grado de desarrollo **consumado**, en el que a la acusada le corresponde participación en calidad de **autor**, según lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, toda vez que ha participado en su comisión de manera directa e inmediata, respecto de la que concurre la circunstancia agravante de la responsabilidad penal contenida en el art 12 N° 16 del Código Penal. Por lo que solicita se imponga a la acusada **KARINNA ALEJANDRA CASTRO GUTIÉRREZ** la pena de **12 años de presidio mayor en su grado medio, multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales** como autor del delito consumado de **Tráfico de Drogas**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la Ley N°20.000, las penas accesorias contempladas en el artículo 30 del Código Penal, el comiso de las especies incautadas, y al pago de las costas de la causa, según lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal, y a lo dispuesto en el artículo 17, inciso final de la ley 19.970.

TERCERO: Que en el **alegato de inicio**, el **Ministerio Público**, indicó, en síntesis, que logrará acreditar más allá de toda duda razonable los hechos consignados en la acusación, manifestando que con la prueba que rendirá en el juicio acreditará la existencia del delito y la participación de la acusada en el mismo, por lo que solicitará un veredicto condenatorio.

Para acreditar sus alegaciones rindió prueba testimonial, documental, material y otros medios de prueba.

En su **clausura** estimó, que con la prueba rendida, la que mencionó y resumió, se cumplió su promesa, señalando que beneficia a la acusada la minorante del artículo 11 N° 9 del Código Penal.

Por su parte, en su **apertura, la defensa**, planteó una teoría colaborativa, señalando que se solicitará que se reconozca a su representada la circunstancia atenuante de responsabilidad del artículo 11 N° 9. En su **clausura**, insistió en sus planteamientos, solicitando la calificación de la atenuante.

CUARTO: Que la acusada renunció a su derecho a guardar silencio y prestó declaración, en la oportunidad señalada en el artículo 326 del Código Procesal Penal, señalando que el 7 de marzo de 2022, cerca de las 13:30 horas, se encontraba afuera de su casa y llegaron funcionarios de la PDI, buscando a los participantes de una balacera y, ante el miedo de que le encontraran la droga que portaba, salió arrancando, sin éxito. Reconoce que la droga era de su propiedad y que comercializaba aquella que se encontraba dosificada, ya que la que estaba a granel, debía ir a dejarla a un domicilio para guardarla. Agrega que la droga se le entregaba una persona llamada Roxanna.

Señala que declaró en la fiscalía por esta causa y que siempre ha colaborado.

QUINTO: Que en la audiencia de preparación de juicio oral los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

SEXTO: Que la fiscalía para acreditar los hechos de la acusación rindió prueba testimonial, consistente en los dichos de las funcionarias aprehensoras, Inspectoras de la PDI **Viviana Alexandra Cisternas Gutiérrez** y **María Ignacia Álvarez Gaete** las que indican que el 7 de marzo de 2022, se encontraban en la BRICRIM de Macul y recibieron un mensaje a través de chat institucional, en el que el jefe de su unidad les enviaba el video de una balacera ocurrida en la intersección de Pasaje Visviri con calle Mayor Abe, de la población Santa Julia de dicha comuna, solicitándoles que fueran al lugar. Refieren que concurrieron 5 carros con cerca de 20 policías, que ellas iban en el primero de los carros y que al llegar a dicha intersección vieron a un grupo de cerca de 5 personas y que, al acercarse a ellos a preguntarles información

sobre la balacera, una mujer que portaba un bolso tipo banano, huyó corriendo, por lo que salieron en su persecución, con la finalidad de realizarle un control de identidad ya que podía mantener armas en su poder.

Indican en el bolso llevaba gran cantidad de droga, Cisterna Gutiérrez precisa que en su interior encontraron 2 calcetines, uno con 120 envoltorios, de pasta base de cocaína, con un peso de 62,32 peso bruto, mientras que el otro contenía 58 envoltorios, con un peso bruto 16,82 gramos de cocaína; portaba también una bolsa de color verde envuelta en papel adhesivo, contenedora de cocaína, con un pesaje bruto de 29,64 gramos; un monedero con 89 envoltorios de pasta base de cocaína 23 gramos brutos y 3 envoltorios de color blanco, de mayor tamaño, que contenían pasta base, con un peso de 31,40 gramos, **evidencia material** que reconoce en las NUE que se le exhiben con los números 6345418, 6345419, 6345420, 6345421 y 6345422, las que arrojaron un peso bruto total de 200 gramos de clorhidrato de cocaína y 50 gramos de cocaína base.

Dicha testigo, en las **imágenes** que se le exhiben, describe el WhatsApp en el que se ve el video del tiroteo, así como acercamientos del sujeto y una imagen de google maps del sitio de suceso, mismo en el que se encontraba a acusada. Reconoce también el banano, las especies encontradas en su interior y el pesaje de la droga.

Ambas explican, conforme a su experiencia que, de un gramo de pasta base salen 5 dosis y en el caso de cocaína por cada gramo se sacan 2 dosis, que la pasta base tiene un valor de \$1.000, mientras que la cocaína de \$5.000 por dosis, de modo que de la droga encontrada a la acusada, se puede obtener aproximadamente \$1.500.000 en total.

Están contestes en que la acusada colaboró en todo momento, prestando declaración el mismo día de los hechos ante el fiscal, reconociendo que se encontraba vendiendo la droga, así como también proporcionó información respecto de las personas y los motivos de la balacera ocurrida en el sector. Álvarez Gaete añade que la acusada entregó su nombre y que proporcionó antecedentes relativos a otra investigación quien se encontraba en curso, la que sin embargo, no fue posible de corroborar.

Además el Ministerio Público, aportó mediante su lectura resumida, prueba **documental**, consistente en Reservado N° 3625-2022, respecto de las NUE 6345418, 6345419, 6345420, 6345421 y 6345422, de fecha 24 de marzo de 2022, emanada del Instituto de Salud Pública, que da cuenta de la recepción los códigos de muestra M1, M2, M3, M4 y M5; Protocolo de análisis químico Subdepartamento Sustancias ilícitas, de fecha 24 de marzo del 2022, correspondiente a las mismas N.U.E. 6345418, 6345419, 6345420, 6345421 y 6345422, las que arrojaron como composición cocaína y conclusión cocaína base, con una pureza de 74%, 73%, 34%, 62%, 71%, respectivamente; Informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de la Cocaína base, correspondiente a las N.U.E. 6345418, 6345419, 6345420, 6345421, 6345422; Acta Recepción N° 1569-2022, de fecha 08 de marzo del 2022, emitida por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, correspondiente a: 120 papelillos con un peso bruto de 30,4 gramos brutos y 10,9 gramos neto; 58 papelillos con un peso bruto de 15, 0 gramos brutos y 5,2 gramos neto; una bolsa de nylon verde con un peso bruto de 129, 1 gramos brutos y 105,5 gramos neto; 89 papelillos con un peso bruto de 22, 2 gramos brutos y 9,4 gramos neto y 3 envoltorios de papel con un peso bruto de 30,4 gramos brutos y 6,8 gramos neto y Acta de recepción de dineros incautados N° 500 de fecha 07 de marzo del 2022 correspondiente a \$86.620.

SÉPTIMO: Que tal como lo anunciara el Tribunal al dar lectura al veredicto condenatorio, estos jueces por unanimidad, estimaron que la prueba vertida resultó suficiente para acreditar en el juicio oral la participación de la acusada en los hechos materia de la acusación, ya que se acreditó que el día, a la hora y en las circunstancias anotadas y se encontró en poder de la acusada, en el banano que portaba, droga dosificada y a granel, en distintos contenedores.

Así, el testimonio de las funcionarias aprehensoras, quiénes declararon en forma circunstanciada sobre la dinámica del procedimiento y detención de Castro Gutiérrez, lo que concuerda con la evidencia fotográfica exhibida en audiencia, la declaración que ésta vertiera en estrados, documentos e informe pericial que dan cuenta de la naturaleza de las sustancias descubiertas, su pureza y peso además que se encuentran sujetas al control de la Ley 20.000,

elementos de convicción que, apreciados con libertad conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal, y sin contradecir la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, permiten tener por acreditado más allá de toda duda razonable, el siguiente enunciado fáctico:

*“El día 07 de marzo del 2022, siendo aproximadamente las 13:30 horas, en el sector correspondiente a calle Mayor Abe intersección pasaje Visviri, Población Santa Julia, comuna de Macul, **KARINNA ALEJANDRA CASTRO GUTIÉRREZ**, fue sorprendida portando y trasladando al interior de un bolso color negro, diversos contenedores de pasta base de cocaína de acuerdo al siguiente detalle: 01 Calcetín blanco con 120 envoltorios de papel blanco cuadriculado contenedores de pasta base de cocaína, con un peso bruto de 32,62 gramos; un calcetín blanco, en cuyo interior había 58 envoltorios de papel blanco cuadriculado contenedores de pasta base de cocaína, con un peso bruto de 16.81 gramos; una bolsa verde con pasta base de cocaína a granel con un peso bruto de 129,64 gramos; un monedero color negro en cuyo interior portaba 89 envoltorios de papel banco cuadriculado contenedores de pasta base de cocaína con un peso bruto de 23,76 gramos y tres envoltorios de papel blanco, contenedores de pasta base de cocaína, con un peso bruto de 31,40 gramos, ascendiendo el total de la cocaína base que la **CASTRO GUTIERREZ** transportaba y mantenía en su poder a 234,23 gramos brutos, además de la suma de \$ 86.620”.*

OCTAVO: Que estos hechos acreditados configuran el delito de tráfico ilícito de estupefacientes establecido en el artículo 3° en relación con el artículo 1°, ambos de la Ley N° 20.000, en la medida que se acreditó que la acusada poseía y mantenía sustancias a que se refiere el artículo 1° del reglamento de la ley 20.000 -en este caso cocaína clorhidrato- sin justificar que contara con la autorización correspondiente, antecedente que aunado a circunstancias como la cantidad de droga encontrada –cerca de 137,8 gramos neto-, el grado de pureza de una de ellas, una de ellas correspondiente a 34%, mientras que las otras con una pureza de entre un 62% a 74%, el hallazgo de dinero en efectivo y la forma en que estaba embalada –papelillos, bolsas de nylon y tres

papeles de mayor tamaño-, evidencian que estaban destinadas a su transferencia o distribución a terceros.

NOVENO: Que el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, requiere para su configuración que una persona trafique, a cualquier título con sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, -productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública- con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a los que, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias.

Entendiéndose que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.

Para acreditar los presupuestos fácticos contenidos en la acusación, así como la participación atribuida al acusado, el Ministerio Público rindió la prueba ya analizada precedentemente.

DÉCIMO: Que la **participación** que en el ilícito cupo a Castro Gutiérrez, fue establecida con la misma prueba de cargo, especialmente con los dichos creíbles, directos y categóricos de las funcionarias de la PDI quienes en forma clara, fiable, precisa y categórica dieron cuenta del modo, lugar y circunstancias en que ocurrieron los hechos en estudio, procedimiento que culminó con la detención de aquella al haber sido sorprendida poseyendo drogas destinadas a su comercialización, lo que permitió desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a la acusada.

En suma, se determina que la participación de ésta en el ilícito corresponde a la definida en el artículo 15 N°1 del Código Penal, que considera como autor a quien, como en la especie, toma parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa.

UNDÉCIMO: Que en la audiencia prevista en el artículo **343 del Código Procesal Penal**, la Fiscalía incorporó extracto de filiación y antecedentes de la encausada, quien registra diversos antecedentes prontuarios pretéritos, como autora del delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga, entre éstos, la

condena impuesta por el 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en la causa RIT 509/2019, en la que mediante sentencia del 21 de enero de 2022, fue condenada como autora del delito de tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas en pequeñas cantidades previsto y sancionado en el artículo 4° en relación al artículo 1° ambos de la ley 20.000, a la pena de 600 días de presidio menor en su grado medio y multa de 1 de unidades tributarias mensuales, acompañando también copia de dicha sentencia y certificación de encontrarse ejecutoriada.

Por todo lo anterior, y estimando que concurre la circunstancia agravante de responsabilidad penal del artículo 12 N° 16 del Código Penal, así como la atenuante de responsabilidad de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, el fiscal, cambiando su pretensión primitiva solicitó se aplicara la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales y el comiso de las especies.

Escuchada la defensa, ésta solicitó el reconocimiento de la minorante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, como muy calificada, atendido la declaración prestada por su representada ante el fiscal el día de los hechos a la declaración de su representado el día de hoy como aquellas prestadas en fiscalía, por lo que pide la rebaja de la pena en dos grados, compensar una atenuante con una agravante, solicitando así entonces la pena en 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, con cumplimiento efectivo y que la multa se rebaje atendido a que su representado se encuentra privado de libertad.

DUODÉCIMO: Que en lo relativo a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, esta sentencia ya ha anunciado la especial incidencia que tuvo en la determinación del hecho punible y la participación del encartada, la colaboración prestada por Castro Gutiérrez desde el momento en que fue sorprendida, entregando voluntariamente las sustancias incautadas, prestando declaración ante el fiscal de la causa y luego declarando nuevamente en el juicio, corroborando los dichos de éste, lo que permitió al persecutor liberar prueba, así pues, la declaración de la acusada ha sido decisiva para la clarificación del suceso, por lo que la atenuante de

responsabilidad del **artículo 11 N° 9 del Código Penal**, será acogida, pero no se accederá a la calificación de la misma por no cumplirse los estándares necesarios para ello, toda vez que aun cuando prestó declaración, lo cierto es que con la prueba rendida por el ministerio público se lograba acreditar la ocurrencia del hecho y la participación de la acusada en los mismos,.

Por otra parte, **se acoge la agravante del artículo 12 N° 16 del Código Penal**, alegada por el Ministerio Público, toda vez que conforme su extracto de filiación y antecedentes, figura, en lo atinente, una anotación relativa al Rit 509-2019, del 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en que fue condenada como autor de tráfico ilícito en pequeñas cantidades del artículo 4° de la ley 20.000, con fecha 21 de enero de 2020, a la pena de 600 días de presidio menor en su grado medio. De igual modo se allegó copia de la referida sentencia, en la que figuran análogos datos que los que se consignan, así como certificación de encontrarse ejecutoriada.

De este modo, atendido el contenido de los documentos descritos, resulta evidente que la condena corresponde a un delito de la misma especie que el que nos convoca en la presente causa, y que desde la comisión de tal ilícito no han transcurrido los plazos que estipula el artículo 104 del Código Penal, razón por la cual se estima procedente acoger esta agravante.

DÉCIMO TERCERO: Que el delito por los que se ha estimado responsable al encartado es de tráfico ilícito de estupefacientes establecido en el artículo 3° en relación con el artículo 1°, ambos de la Ley N° 20.000, y la pena asignada al ilícito es de presidio mayor en su grado mínimo a medio, esto es de 5 años y 1 día a 15 años, debiendo considerar a efectos de la determinación de la pena corporal, que a la acusada la perjudica una circunstancia agravante de responsabilidad penal y la favorece una circunstancia atenuante, por lo que el tribunal procederá a compensarla racionalmente, pudiendo recorrer la pena en toda su extensión.

Luego, aun cuando no haya sido así reconocido por le persecutor,estiman estas sentenciadores que le beneficia la circunstancia atenuante de cooperación eficaz del artículo 22 de la ley 20.000, atendido que conforme al relato que realizaron las dos funcionarias aprehensoras, Castro

Gutiérrez, además de reconocer su participación en los hechos de la presente causa, colaboró con la investigación de la balacera ocurrida en la población Santa Julia, que motivo la concurrencia del personal policial al lugar, señalado los motivos de aquella y los autores de las misma, así como también, aportó antecedentes relativos a la investigación de otro ilícito, por lo que estiman estas sentenciadoras se cumple con lo dispuesto en la norma legal citada, en el entendido que su colaboración resulta apta para “prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en esta ley”,

Así, favoreciéndole la atenuante especial prevista en el artículo 22 de la Ley N°20.000, ha optado este tribunal por rebajar dicha pena en un grado, - considerando que no se aportó algún antecedente que justificara una rebaja mayor-, quedando así fijado definitivamente el marco penal dentro del presidio mayor en su grado mínimo. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del mismo código, teniendo en consideración la extensión del mal causado, que en este caso fue menor por la incautación de la totalidad de la droga, se impondrá la pena en su mínimo, por estimar el tribunal que ésta es la pena más justa aplicable al acusado y la más condigna al hecho y sus circunstancias.

En lo que respecta a la pena de multa, su quantum será fijado en el mínimo, toda vez que si bien se acompañó un informe social de la acusada, este no resulta de la entidad necesaria para rebajar el monto de la multa del mínimo legal.

DÉCIMO CUARTO: Que en cuanto a la pena de **comiso** de las especies utilizadas para la comisión del delito y conforme lo dispone el artículo 31 del Código Penal, de conformidad con el cual la pena que se imponga por un crimen o simple delito, lleva consigo la pérdida de las especies que de él provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del crimen o simple delito y según lo preceptuado en el artículo 45 de la Ley 20.000, éste será decretado respecto de los calcetines, bolsa, monedero y de la suma de \$8606, los que se entienden, considerando la actividad desarrollada, corresponden a instrumentos del delito

que nos ocupa, debiendo destinarse o destruirse al tenor del artículo 46 de la ley N°20.000.

DÉCIMO QUINTO: Que no reuniéndose los requisitos para ello, **no se le sustituirá a la acusada la pena de presidio por ninguna de las contempladas en la Ley 18.216**, debiendo cumplir efectivamente su pena privativa de libertad, sirviendo de abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa, según se dirá en lo resolutivo.

DÉCIMO SEXTO: Que **no se condenará al pago de las costas** de la causa a la acusada, por haber sido asistida por la defensoría penal pública.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11 N° 9, 12 N° 16, 14 N° 1, 15 N° 1, 24, 25, 26, 28, 31, 49, 50, 68, 69 y 70 del Código Penal; artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 36, 45, 47, 49, 166, 295, 296, 297, 298, 309, 315, 323, 325, 333, 340, 341, 342, 344, 346, y 348 del Código Procesal Penal; artículos 1, 3, 22 y 45 de la Ley 20.000, **se resuelve que:**

I.- Se condena a KARINNA ALEJANDRA CASTRO GUTIÉRREZ, ya individualizada, a cumplir la pena de **tres años y un día de presidio menor en su grado máximo**, más el pago de una **multa de 40 (cuarenta) unidades tributarias mensuales** y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, como autora del **delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas** cometido el día 7 de marzo de 2022 en la comuna de La Florida.

Se faculta a la condenada, a pagar la multa impuesta en 10 (diez) parcialidades mensuales, iguales y sucesivas, 4 (cuatro) unidades tributarias mensuales, pagaderas los últimos cinco días de cada mes, comenzando por el mes siguiente a aquél en que quede ejecutoriada la presente sentencia. El no pago de cualquiera de las cuotas, en el plazo debido, hará exigible el total de la multa adeudada

II.- No reuniendo la sentenciada los requisitos de la Ley N° 18.216, **no se sustituirá la pena corporal impuesta**, debiendo cumplirla efectivamente, la que se le contabilizará desde el día 8 de marzo de 2022, tiempo que ha

permanecido privado de libertad por esta causa ininterrumpidamente, conforme a la certificación del Ministro de Fe.

III.- Se decreta el **comiso** de las especies indicadas en el considerando décimo cuarto.

IV.- Una vez ejecutoriada esta sentencia, procédase a la incorporación de la huella genética de la sentenciada en el Registro de Condenados, si dichas huellas hubieren sido determinadas durante el procedimiento criminal o, en su defecto, disponiéndose la correspondiente toma de muestras biológicas necesarias para dicho fin, de acuerdo lo dispone la Ley N° 19.970 y su reglamento.

V.- Atendido lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, asignando la ley pena aflictiva al delito por el cual se condenó a la enjuiciada, comuníquese al Servicio Electoral la presente sentencia condenatoria, si fuere procedente.

Devuélvase a los intervinientes los documentos y evidencia material incorporados en la audiencia.

Ofíciase, en su oportunidad, a los organismos que corresponda para hacer cumplir lo resuelto y remítanse los antecedentes necesarios al señor (a) Juez de Garantía de la causa para la ejecución de la pena.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Juez Alejandra Hume Contreras.

RIT: 107-2023.-

RUC: 2200219141-9

PRONUNCIADA POR UNA SALA DEL SÉPTIMO TRIBUNAL DEL JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, INTEGRADA POR LAS JUEZAS BERNARDITA GONZÁLEZ FIGARI, QUIEN PRESIDÓ, MARCELA ERAZO RIVERA Y ALEJANDRA HUME CONTRERAS.